



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

En Mendoza, a los                      días del mes de                      de 2020, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, doctores Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, Alfredo Rafael Porras y Manuel Alberto Pizarro, juez subrogante, procedieron a resolver en definitiva estos autos **Nº FMZ 8771/2020/CA1**, caratulados: **“MINAS ARGENTINAS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS - DIVISION SAN JUAN s/ AMPARO LEY 16.986”**, venidos del Juzgado Federal de San Juan Nº 2, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 2/07/20, por AFIP-DGA, contra la sentencia de fecha 30/06/20, que resolvió: *“I) Hacer lugar a la Acción de Amparo promovida por la actora MINAS ARGENTINAS en contra de la AFIP – DGA ordenando al ente administrador que proceda a liquidar los derechos de exportación adeudados por la empresa, a partir del 23/12/2019, con el tope del 8% (art. 52 de la ley 27.541). II) No hacer lugar a lo solicitado a fs. 343, de conformidad al punto III de los considerandos y art. 16 de la Ley 16.986. III) Costas a la demandada (art. 68 CPCCN). IV) Regular los honorarios de la Dra. María Paula Carena en la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos (\$ 95.762) equivalentes a 30 UMA (Acordada Nº 2/2020), y para los Dres. Juan Carlos Benítez y José Sebastián Lloveras, en forma conjunta, en la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta (\$ 63.840) equivalentes a 20 UMA (Acordada Nº 2/2020), de conformidad con los arts. 16 y 48 de la Ley 27.423. IV) Protocolícese, notifíquese.”*

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: doctor Alfredo Rafael Porras, doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y doctor Manuel Alberto Pizarro.

Sobre la única cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Alfredo Rafael

Porras, dijo:

1) La presente causa se inició con una acción de amparo deducida por Minas Argentinas S.A. contra la Dirección General de Aduanas División San Juan (en adelante, DGA o Aduanas), a fin de que se declare ilegal, arbitrario, ilegítimo e inconstitucional la aplicación por parte de esa repartición de derechos de exportación superiores al tope del 8 % sobre el valor imponible o



precio final FOB conforme lo establecido en el art. 52 de la ley 27541 y se ordene asimismo que se abstenga de aplicar en el futuro a la empresa un derecho de exportación superior a dicho tope.

Asimismo, pidió medida cautelar tendiente a que se ordene a la Aduana abstenerse de aplicar derechos de exportación en exceso del tope del 8%, mientras dure el proceso.

El Sr. Juez federal de primera instancia ordenó a la DGA producir el informe previo al dictado de la resolución cautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854 y, al mismo tiempo, le corrió traslado de la demanda para que presente el informe del artículo 8 de la ley 16986.

Presentados los informes, el Magistrado de grado, mediante sentencia definitiva, consideró que había devenido abstracto pronunciarse sobre la medida cautelar debido a que, en ese mismo acto jurisdiccional, resolvía el fondo del litigio. Así las cosas, decidió hacer lugar al amparo, ordenando al ente administrador que proceda a liquidar los derechos de exportación adeudados por la empresa, a partir del 23/12/2019, con el tope del 8% (art. 52 de la ley 27541).

2) La demandada, en fecha 2/07/20, dedujo recurso de apelación fundado contra la sentencia.

Como primer agravio, la recurrente arguyó una errónea motivación de la sentencia al tratar la improcedencia de la vía de amparo por falta de agotamiento de la vía administrativa.

Sostuvo que, si la cuestión se limita a la interpretación y preeminencia que cabe asignar a los artículos 52 y 54 de la ley 27541, y el actor consideraba estar frente a un estado de incertidumbre, debió acudir a la vía de la acción meramente declarativa regulada en el artículo 322 del CPCCN que tramita por la vía ordinaria y que desplaza al amparo. Citó Fallos 335:1222 en respaldo de esta tesis.

Desde otro ángulo, argumentó que los derechos estrictamente patrimoniales encuentran, por regla, protección idónea a través de las muchas acciones ordinarias consagradas por el legislador y, por ello, la Corte ha rechazado amparos de aquél tenor por no acreditarse que las vías ordinarias no proveen tutela adecuada.

Invocó los arts. 30 y 31 de la ley 19549.

Como segundo agravio, alegó la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta debido a que, a criterio de la apelante, el litigio se limita a un cruce de interpretaciones sobre los artículos 52 y 54 de la ley 27541 que constituye, cuanto mucho, un tema opinable, pero no puede identificarse con la arbitrariedad requerida en el amparo. Ello así, toda vez que la hermenéutica defendida por Aduanas se encuentra sostenida por razonamientos jurídicos sólidos que le quitan la tacha de arbitrariedad. Citó jurisprudencia.

En tercer término, acusó una inadecuada aplicación de las reglas de hermenéutica por parte del Sr. Juez.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

En tal sentido, se quejó de la invocación del art. 1 de la ley 11683 (t.o. 1998) porque el principio de significación económica allí consagrado no se aplica a los derechos de exportación toda vez que aquél artículo establece su aplicabilidad a los tributos regidos por la ley 11683, que no es el caso de los derechos de exportación, regidos por el Código Aduanero.

Sin perjuicio de ello, afirmó que la significación económica es una regla hermenéutica ajena a este caso porque ella constituye un elemento jurídico de captación de la verdadera entidad sustantiva de un hecho imponible para determinar si se encuentra alcanzado o no por un impuesto y aquí, en cambio, el hecho imponible – exportación para consumo es un acto jurídico simple, claro, carente de complejidad, que no requiere del principio de significación económica para ser interpretado.

En otro orden de ideas, se quejó de que el Sr. Juez considerara que los artículos 52 y 54 de la ley son incompatibles y decidiera suprimir o modificar algunos aspectos de ellos. De ese modo –continuó la recurrente, el juez contrarió la histórica pauta interpretativa de la Corte según la cual debe evitarse dar a las normas un sentido que las ponga en pugna y destruya unas en aras de otras y debe, en cambio, dárseles un sentido que las concilie y deje a todas con valor y efecto. A su vez, según la apelante, el *a quo* contrarió la pauta hermenéutica según la cual no corresponde interpretar un artículo sólo por su fin inmediato sino que debe procurarse que todos se entiendan teniendo en cuenta los fines de los demás.

En esta misma dirección, agregó que su parte ha ofrecido una interpretación que respeta esas pautas hermenéuticas sobre la cual abundará más adelante según la cual el artículo 52 es una norma delegante programática.

Como cuarto agravio, criticó la omisión de aplicación del principio *solve et repete*, en virtud del cual primero debe pagarse el reclamo tributario y posteriormente promoverse la devolución o repetición de lo pagado cuando se considera que ese pago es incorrecto o sin causa.

Destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la validez de ese principio máxime cuando, como en el caso, la empresa no demostró encontrarse impedida de pagar los tributos.

A continuación, arguyó que no se afectó el principio de legalidad tributaria atento al carácter legislativo del decreto 793/2018, el cual fue desconocido por la sentencia en crisis, donde se hizo –según la DGA una errónea interpretación de la ley 27541.



Al desarrollar este agravio, alegó que la invocación del principio de legalidad tributaria para fundar la sentencia es absolutamente equivocada puesto que, con la ratificación legislativa del decreto 793/2018 primero mediante el art. 82 de la ley 27467 y luego, por segunda vez, mediante el art. 54 de la ley 27541, la carga tributaria que él contiene se ajustó a los parámetros del caso “Camaronera Patagónica SA”. En este precedente, pues, la Corte Federal admitió la convalidación legislativa a futuro de normas de menor jerarquía que creaban derechos de exportación. Por eso –concluyó la recurrente, el decreto 793/2018 no puede ser atacado de inconstitucional a partir de la ratificación legislativa.

De este modo, al ratificarse el decreto 793/2018, se lo colocó en el mismo escalón jurídico que las leyes y, en consecuencia, es equivocado el argumento del *a quo* sobre “la superioridad jerárquica de la ley respecto de la potestad reglamentaria de ejecución”.

En sexto lugar, el apelante postuló que el Juez de primera instancia suprimió incorrectamente el art. 54 de la ley 27541 y no consideró que el art. 52 es una norma delegante de carácter programático.

En efecto, según Aduanas el magistrado suprimió jurídicamente y en los hechos las disposiciones del art. 54 en lugar de hacer una interpretación armonizadora con el art. 52.

Adujo que una correcta interpretación debe tomar en cuenta que el artículo 52 dice que el Poder Ejecutivo “podrá” ejercer las facultades que le otorga la norma para fijar alícuotas, por lo que estamos frente a una disposición que lo autoriza a fijar derechos de exportación a futuro, con límites en las alícuotas, pero no genera de forma inmediata y directa derechos para los administrados, ya que se trata de una norma programática que tiene condicionada su eficacia al dictado de una nueva norma que la reglamente o ponga en práctica.

En la misma dirección, sostuvo que, cuando el artículo 54 dice que “sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior” se ratifica el decreto 793/2018, sin lugar a dudas se está refiriendo al artículo 52 (y no al 53), que es el que contiene la delegación en el Poder Ejecutivo para modificar alícuotas con los topes allí establecidos.

Agregó que, si el legislador hubiera entendido que la alícuota del 8% para los productos mineros e hidrocarburos debía aplicarse inmediatamente, lo habría asentado expresamente en el texto legal.

En suma, concluyó que el tope del 8% deberá ser acatado por el Poder Ejecutivo recién cuando decida hacer uso de la facultad delegada de fijar la alícuota.

En su séptimo agravio, se quejó respecto de la negativa de convocar al Poder Ejecutivo Nacional para intervenir en el proceso, puesto que es la autoridad delegada y habida cuenta que





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 8771/2020/CA1

la AFIP es solamente un órgano ejecutor de la política tributaria, sin capacidad para apartarse de la letra de la norma.

Por otro lado, se quejó de la omisión de remitir el expediente al Juzgado Federal N° 1, en atención a la intervención como letrada de la empresa actora, la Dra. Paula Carena, ex funcionaria del Juzgado Federal N° 2.

Expresó que, a fin de garantizar la absoluta imparcialidad el magistrado debió enviar el proceso al otro juzgado existente en la ciudad teniendo en cuenta que la permanencia del expediente en la Secretaría que depende del juez apartado por decisión propia, no asegura el grado de imparcialidad que reclama el debido proceso y el derecho de defensa puesto que no existe independencia de criterio.

Atento no haber existido tan remisión, solicitó la nulidad de la sentencia por afectación de los constitucionales derechos de defensa y debido proceso.

Finalmente, la demandada criticó por alta la regulación de honorarios de los letrados de la actora. Entiende que son desproporcionados en relación al objeto de la litis por cuanto la pretensión admitida en el amparo carece de monto económico determinado hasta el momento, lo cual no se ve enervado por las manifestaciones unilaterales de la contrario referidos al valor FOB que estima exportará durante el año 2020, el que no puede ser tenido como base de la regulación puesto que no es verificable.

Reserva el caso federal.

3) Corrido el traslado pertinente, en fecha 6/07/20 la actora contestó agravios con argumentos a los que me remito en honor a la brevedad.

4) Elevada la causa a esta Alzada, se corre vista a la Fiscalía de Cámara, en los términos de la ley 24946, art. 39 segundo párrafo y arts. 30 y 31 incs. b) y e) de la ley 27148.

En fecha 11/08/20 se presenta el Sr. Fiscal General e informa. Considera improcedente la vía de amparo elegida, por existir otra vía idónea, conforme exige el art. 2 de la ley 16986.

Alega que, en el orden administrativo, el procedimiento adecuado debiera ser el de “repetición” previsto en el art. 1068 y sgtes. del Cód. Aduanero. Y, en el orden judicial, el propio código establece un procedimiento judicial ante el rechazo de la acción de repetición, contemplado en el Art. 1132 del C.A. que establece de manera optativa y excluyente, el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, o la demanda contenciosa ante el Juez competente.

Asimismo, alega que no existe imposibilidad de reparación ulterior, acudiendo nuevamente a la vía de repetición. Así como tampoco arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA



#34791407#266795511#20200915123918976

parte de Aduanas, ya que su actuar se funda en el art. 54 de la misma ley 27541 que expresamente mantiene la vigencia de dicha disposición.

Invoca Jurisprudencia.

5) Ingresando en el examen del recurso, por una cuestión de orden lógico, en primer lugar, corresponde adentrarse en la nulidad de la sentencia invocada, por presunta violación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso; toda vez que, de ello depende el análisis del resto de los agravios.

La accionada alega que, atento que la apoderada de la accionante, Dra. Paula Carena, ha sido funcionaria del Juzgado Federal N° 2, razón por la cual el magistrado se habría inhibido, la consecuencia lógica habría sido la remisión de la causa al Juzgado Federal N° 1, a fin de no atentar contra el principio de imparcialidad.

En principio, cabe destacar que para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario que quien la invoque alegue y demuestre que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable. La declaración de nulidad por la declaración misma, es improcedente, por cuanto rige en la materia, el carácter restrictivo de la misma.

En esa inteligencia, no corresponde sino el rechazo de la solicitud del apelante, en tanto no se ha advertido violación alguna a los derechos constitucionales invocados. Es que, ello podría haberse dado si el magistrado titular del juzgado federal no se hubiere inhibido. Más, en resguardo de la imparcialidad que debe reinar en todo juzgamiento, se produjo la pertinente inhibición y la causa continuó en cabeza del Dr. Gálvez, quien justamente es el juez titular del Juzgado Federal N° 1 al que pretende la recurrente remitir la causa.

En efecto, de haber sido remitidas las actuaciones, también habrían recaído sobre el mismo magistrado, Dr. Gálvez, no existiendo entonces causa fundada alguna que de lugar a la nulidad planteada. No se avizora perjuicio alguno que justifique acudir a dicha sanción legal.

Por otro lado, tal como bien expone el *a quo*, respecto del proceso llevado a cabo en el mismo juzgado del cual formó parte la Dra. Carena, la ley 22192, que reglamenta el ejercicio de la abogacía en los Tribunales Federales de todo el país, en su art. 15 inc. c), establece que se le encuentra prohibido a los abogados intervenir en procesos judiciales que tramiten ante el tribunal en que se hayan desempeñado como magistrados o funcionarios, antes de haber transcurrido dos (2) años desde que cesaron en el cargo. A contrario *sensu*, habiendo transcurridos los dos años previstos por ley, la Dra. Carena podría actuar en el Juzgado del cual formó parte, deviniendo dicha actuación legal.

Por lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad planteada en este sentido.

6) Superado tal obstáculo, e ingresando al análisis de los restantes agravios, entendemos que la apelación aquí vertida es procedente y que, por ende, corresponde revocar la sentencia de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

primera instancia y rechazar la acción de amparo por los fundamentos que se expondrán a continuación.

Previo a todo, es preciso aclarar que se analizarán sólo los agravios que resulten dirimientes de la apelación, pues “no es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por el recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la solución del litigio” (conf. Fallos 312:1500; 308:2263; 234:250; 294:427; 322:270; 316:2908; 316:50; 315:1185; 311:1191).

7) Sentado ello, corresponde considerar primeramente los agravios por los que se cuestiona la vía del amparo, los que se desestiman por las siguientes razones.

La apelante, y en idéntico sentido el Sr. Fiscal de Cámara, entienden que el amparo no sería la vía adecuada, por cuanto existirían otros medios más idóneos para hacer efectivo lo aquí pretendido: 1) la vía de repetición prevista por el Código Aduanero en el art. 1068 y sgtes.; o 2) la acción meramente declarativa de certeza, prevista por el art. 322 del CPCCN.

De modo preliminar, considero que el amparo es vía hábil para ventilar la controversia bajo estudio, toda vez que se alega amenazado y lesionado un derecho constitucional como es el de propiedad, y es abundante la jurisprudencia del Máximo Tribunal que admite las discusiones sobre este derecho patrimonial a través de la vía excepcional del amparo (v. gr., causa “Candy”, Fallos 332:1571; o “Cameronera Patagónica S.A.”, Fallos 337:388).

Además, en “Cameronera Patagónica S.A.”, el Máximo Tribunal sostuvo lo siguiente en términos que resultan aplicables al *sub lite* desde que se trata de un caso que presenta algunas similitudes relevantes con éste porque –al igual que aquí se discutía la legitimidad del cobro de derechos de exportación y la cuestión era de puro derecho: “...el amparo resulta admisible si su empleo no ha reducido las posibilidades de defensa de la demandada en cuanto a la extensión de la discusión y de la prueba (Fallos: 320: 1339). En tales condiciones, y dado que la apelante no ha señalado, ni mucho menos demostrado, la existencia de pruebas de que se haya querido valer y que por las características sumarias del amparo se ha visto frustrada de producir en apoyo del derecho que invoca, la remisión a un procedimiento ordinario como lo pretende esa parte solo constituiría un ritualismo inútil.”

Dicho esto, no es ocioso argüir que ningunas de las vías propuestas inicialmente resultan ser las “más” idóneas para hacer valer el derecho en juego.

Respecto de la primera, vale señalar que la vía administrativa de repetición de tributos no tiene idoneidad para desplazar la acción de amparo toda vez que éste tiende a hacer cesar para el futuro una conducta considerada ilegítima. En cambio, el procedimiento de repetición de



tributos sólo se puede llevar adelante y tiene efectos respecto de aquellos pagos ya abonados, lo que determina que deberían iniciarse tantos procedimientos como pagos se hicieren y ninguno de ellos impediría que el Estado continúe cometiendo los actos reputados ilegítimos. Póngase de resalto que el objeto de la presente acción no pretende el reintegro de suma alguna, sino que su intención radica en suspender el cobro futura con la alícuota de 12%.

Por esta misma razón, es improcedente la alegación del principio *solve et repete*, ya que conduce indefectiblemente a la vía de la repetición de impuestos. Amén de esto, es de destacar que la actora, al momento de incoar la demanda e inclusive durante el curso del proceso, ha pagado sus obligaciones en término y, hasta el momento en que fue ejecutiva la sentencia definitiva estimatoria del amparo, en los montos pretendidos por la DGA; razón por la cual la actora ha cumplido con el pago previo de las obligaciones tributarias ya devengadas.

En otro orden de ideas, tampoco puede citarse la acción declarativa de certeza como excluyente del amparo cuando también tiene carácter subsidiario de otras vías procedimentales y la DGA no ha justificado satisfactoriamente por qué es **más adecuada** que éste para resolver el conflicto traído a estos estrados.

Máxime teniendo en consideración la realidad del presente proceso, el cual ya ha transitado la vía del amparo, ha podido dar con el cumplimiento de todas sus etapas, y se ha dictado sentencia de fondo, sin tener que recurrir a mayor debate y prueba. Admitir que en este momento no sería la vía adecuada podría llevar a una dilación innecesaria del proceso.

Vale resaltar que la Sala “A” de este Tribunal ya ha admitido la vía procesal del amparo como idónea para ventilar cuestiones referidas a los derechos de exportación en los autos FMZ 59123/2018, “Minas Argentinas SA”, sentencia del 30/10/2019 y más recientemente, autos N° FMZ 2834/2020/CA1, “Minera Andina del Sol S.R.L.”, sentencia del 27/08/2020.

Finalmente, el Fiscal de Cámara hace referencia a que la vía no sería la adecuada, atento no encontrarse arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, argumentando que Aduanas habría actuado en base al art. 54 de la ley 27541.

Tal argumento, a mi entender, no resulta viable por cuanto para arribar a tal conclusión, el funcionario parte de la base de la constitucionalidad del artículo 54, norma que justamente cuestiona aquí la accionante.

Para verificar si ha existido arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que funde la presente acción de amparo, por parte de la demandada AFIPDGA, hay que analizar previamente si la norma en la que ésta fundó su conducta, resulta arbitraria e inconstitucional.

Si la causa de la conducta cuestionada, se encuentra viciada por ser inconstitucional, nos encontraríamos frente a un acto legal pero inconstitucional, pasible de ser atacado por la vía de amparo.

---

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA



#34791407#266795511#20200915123918976





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

Es que, tal como refiere Néstor P. Sagués, en su obra “Derecho Procesal Constitucional Acción de Amparo” (5ta. ed. actualizada y ampliada, 1º reimpresión, Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Ciudad de Buenos Aires, 2009): “...cabe aclarar que la ley 16.986 no se dispuso inicialmente para atacar actos legales (conformes con las leyes, decretos y ordenanzas), pero inconstitucionales (caso de una decisión de la autoridad, amoldada a una ley ordinaria, pero opuesta a la ley constitucional); es decir, de un acto legal aunque inconstitucional. Ello surge del art. 2, inc. d), de la ley 16986, que declara inadmisibles el amparo cuando fuere necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, decreto y ordenanzas. **Advertimos, sin embargo, que esta limitación de la ley nacional de amparo ya está superada por la reforma constitucional de 1994, que permite discutir en el amparo la constitucionalidad de las normas en las que se base el acto lesivo**” (Néstor Pedro Sagués, Obra cit., pág. 108) (el resaltado me pertenece).

En efecto, la reforma de 1994 mediante el art. 43 lo transformó en una garantía explícita, al habilitar al juez a declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Por lo que, más allá de lo que se decida en cuanto al fondo de la cuestión, procesalmente se ha habilitado la vía del amparo para cuestionar actos que en principio puedan presumirse legales, pero que su constitucionalidad se halle cuestionada.

En virtud de las razones expuestas, es que entiendo formalmente que el amparo es la vía adecuada para el cuestionamiento e interpretación de los arts. 52 y 54 de la ley 27541, y la consecuente tasa aplicable a los derechos de exportación.

**8)** Previo al examen de los agravios en torno al fondo de la cuestión, conviene hacer una breve reseña de la evolución normativa del tema bajo estudio.

Tal como relató la actora en su demanda, la actividad minera, a partir del 18/12/2015 con la vigencia del decreto 160/2015, tuvo una alícuota de 0% en sus derechos de exportación. La actividad no tributó hasta el 04/09/2018, fecha en que el decreto 793/2018 fijó una alícuota del 12% para sus productos hasta el 31/12/2020. A poco de dictado dicho decreto, el Congreso lo ratificó mediante ley 27467, vigente desde el 12/12/2018.

Posteriormente, en fecha 23/12/2019 se publicó la ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, cuya interpretación dio origen a la presente controversia. La discusión se origina porque, por un lado, el artículo 52 de la ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá fijar una alícuota superior al 8% para los



productos mineros e hidrocarburos; y, por otro lado, el artículo 54 vuelve a ratificar el decreto N° 793/2018 que estableció una alícuota del 12% hasta el 31/12/2020.

9) Hecha la reseña, e ingresando al análisis del recurso, sin perjuicio de la procedencia formal de la vía, consideramos que asiste razón a la demandada en cuanto al fondo del asunto y, en consecuencia, corresponde acoger la apelación y rechazar el amparo conforme a los fundamentos que desarrollamos a continuación.

Los agravios planteados por la recurrente, pueden sintetizarse en los siguientes: a) la errónea superioridad jerárquica de la ley sobre la potestad reglamentaria y analogía del caso con “Camaronera Patagónica SA”; b) errónea hermenéutica por ser el principio de significación económica del artículo 1 de la ley 11683 inaplicable al caso y, por no realizar una interpretación armonizadora de los artículos 52 y 54 de la ley 27541; y c) por no considerar que el tope del 8% para productos mineros establecido en el art. 52 es una norma programática.

Los planteos propuestos encuentran respuesta en un reciente precedente de esta Cámara Federal, Sala “A”: autos N° FMZ 2834/2020/CA1, caratulados “MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. c/ DIRECCIÓN GRAL DE ADUANAS DIVISION SAN JUAN s/ AMPARO LEY 16.986”, del 27/08/20.

Allí se respondió adecuadamente a cada una de las cuestiones planteadas, las cuales expondré para mayor claridad:

a) En relación al primero de los agravios señalados precedentemente, consideramos que asiste razón a la DGA.

A partir de la breve reseña efectuada, se observa que el precedente de la C.S.J.N. “Camaronera Patagónica S.A.” no es análogo a éste y que, por eso, es inadecuado el fundamento expuesto por el *a quo* para dar prevalencia al artículo 52 de la ley 27541, referido a la superioridad jerárquica de la ley sobre la potestad reglamentaria de ejecución.

En efecto, el presente caso difiere precedente citado en que, en éste último, la norma que estableció la alícuota del derecho a la exportación –en el período en que fue declarada inconstitucional tenía jerarquía infralegal, al tratarse de una resolución ministerial y no se sustentaba en una delegación legislativa que estableciera baremos mínimos y máximos para el Poder Ejecutivo.

En cambio, aquí la aparente contradicción se da entre dos normas de igual jerarquía legal: el artículo 52 y el artículo 54 de la ley 27541.

No es ocioso señalar que, por la misma razón desarrollada precedentemente, el presente amparo también difiere, en lo sustancial, de lo resuelto por la Sala “A” de este Tribunal en el caso “Minas Argentinas SA”, FMZ 59123/2018, sentencia del 30/10/2019; ya que





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

allí, aun tratándose de una entidad superior el decreto por sobre una resolución ministerial, lo cierto es que ambas clases de normas tienen inferior jerarquía a una ley y no admiten *per se* delegación alguna para su dictado pues no había ley que así lo dispusiera o que fuera de una amplitud tal que desnaturalizara el mandato del legislador.

En efecto, en dicha causa la Sala declaró la inconstitucionalidad del decreto 793/2018 en el lapso que va desde su entrada en vigencia (04/09/2018) hasta su ratificación legislativa (12/12/2018), en base a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en “Camaronera Patagónica SA” (Fallos 337:388).

En cambio, como ya dijimos, aquí la controversia gira en torno a dos normas de igual rango legal: el artículo 52 de la ley 27541 que estableció un tope del 8% en la alícuota para productos mineros, y el artículo 54 que nuevamente ratificó el decreto 793/2018.

b) Que, también asiste razón al recurrente cuando critica la aplicación que el Sr. Magistrado de grado hizo de las reglas de hermenéutica, quien – recordemos – dio prevalencia al artículo 52 en virtud de la finalidad de reactivación productiva de la ley 27541, con invocación del art. 1 de la ley 11683 que acoge el principio de realidad económica para la interpretación de las leyes tributarias.

Más allá de que, con arreglo a los términos del mismo artículo 1 de la ley 11683, éste no es aplicable a tributos aduaneros debido a que éstos están reglados por la Ley 22415 y no por la ley 11683, consideramos que una interpretación finalista de las normas en juego no conduce necesariamente a la conclusión a la que se arribó.

Ello así toda vez que no se puede ignorar que, si bien uno de los objetivos de la ley 27541 es la reactivación productiva (cfr. art. 2, inciso c), otro lo es la sostenibilidad fiscal (cfr. art. 2, inc. d). Todo ello, en un marco de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Por lo cual, para resolver la aparente contradicción entre el artículo que fija el tope del 8% y el que fija la alícuota del 12% no puede el intérprete inclinarse precipitadamente en favor del primero en base a la finalidad de reactivación productiva, ya que el segundo artículo contribuye al logro del objetivo de sostenibilidad fiscal.

En estas circunstancias, resulta importante discernir el espíritu de la ley 27541 respecto de los derechos de exportación de la actividad minera a partir de su evolución normativa.

En punto a ello, aclaro que la actividad minera dejó de tributar por sus exportaciones por disposición del Poder Ejecutivo desde fines del año 2015 hasta setiembre de 2018. A partir de entonces, el mismo Poder Ejecutivo decidió gravar la actividad con una alícuota del 12%

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA



#34791407#266795511#20200915123918976

debido a la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, entre otros motivos (tal como surge de los considerandos del decreto 793/2018). El Congreso avaló esa disposición tres meses después mediante ratificación legislativa por ley 27467.

A finales del año 2019, el Poder Legislativo dictó la ley 27541 por la cual se delegaron facultades en el Poder Ejecutivo con el fin de dotarle de herramientas para manejar la emergencia pública económica, fiscal, financiera, etc. El Congreso, en dicha oportunidad, ratificó nuevamente el decreto 793/2018, lo cual revela que juzgó necesario mantener la misma alícuota de los derechos de exportación que había sido dispuesta por aquel decreto, habida cuenta de que persistía la necesidad de lograr la sostenibilidad fiscal.

En otras palabras, el espíritu de la ley 27541 evidenciado es enfrentar una emergencia pública económica, fiscal y financiera, por medio, entre otras cosas, del sostenimiento de la recaudación fiscal a través de tributos aduaneros.

Conforme a ese espíritu, corresponde decidir la aparente controversia entre los artículos 52 y 54 teniendo en consideración que este último artículo, al ratificar el decreto 793/2018, se alinea con la necesidad evidenciada de sostener la recaudación estatal.

Esta interpretación se compadece con la regla hermenéutica recomendada por el Máximo Tribunal según la cual: “Es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.” “La hermenéutica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente y habrá de ser aplicado al tiempo de la emisión del fallo judicial” (Fallos 331:1262).

Que, siguiendo esta línea argumental referida a la interpretación de dos artículos de una misma norma que, en principio, aparecerían contradictorios, y tal cual inveterada doctrina del Más Alto Tribunal de la Nación que ha dejado sentado que debe realizarse una interpretación armonizadora por sobre la contradicción que aparentan preceptos jurídicos; es que desarrollaré en este decisorio cuál es la interpretación armónica que se les debe dar a los artículos 52 y 54 de la ley 27541.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “El juez debe conciliar el alcance de las normas aplicables, dejándolas con valor y efecto, evitando darles un sentido que ponga en pugna las disposiciones destruyendo las unas por las otras” (Fallos 341:500).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

La interpretación que se propicia permite que tanto el artículo 52 como el 54 tengan su ámbito de vigencia y permanezcan con valor y efecto.

Con este norte, refiérase que esta interpretación armónica de ambos artículos se sostiene en la faz temporal y, por otra parte, también se sostiene en relación a la alícuota que deberá percibirse por derecho de exportación.

*-En relación a la faz temporal de la norma*, habrá de decirse que la alícuota del 12% del decreto 793/2018, ratificado por el artículo 54 de la ley 27541, tiene vigencia hasta el 31/12/2020 ya que éste es el límite temporal que contiene el mismo decreto.

Mientras que, el tope del 8% del art. 52 de la ley 27541 se extendería hasta el 31/12/2021.

De este modo, tanto el artículo 52 como el artículo 54 de la ley 27541 tienen su ámbito propio de vigencia temporal y quedan ambos con efecto y valor.

*- En relación a la faz de contenido*, límites y facultades delegadas que el legislador le impone al Poder Ejecutivo Nacional, ello surge de una interpretación de los términos del artículo 52.

Este artículo dispone: *“Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB.*

*Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja.*

*Se prohíbe superar el quince por ciento (15%) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero por ciento (0%) a esa fecha.*

*Se prohíbe superar el cinco por ciento (5%) de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional.*

*Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el cinco por ciento (5%) del valor imponible o del precio oficial FOB.*

*Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8%) del valor imponible o del precio oficial FOB.*

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA



#34791407#266795511#20200915123918976

*El sesenta y siete por ciento (67%) del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley, será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y a las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El tres por ciento (3%) se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos. Este Fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.*

*Exceptúase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado regidas por la ley 13.653 y las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705 que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá utilizar la facultad prevista en el artículo 755, apartado b), de la ley 22.415 (Código Aduanero) respecto de entidades estatales o con participación estatal que tengan como finalidad principal desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación.*

*El Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021.”*

Que el análisis atento del artículo 52 de la ley 27541 nos muestra que el primer párrafo tiene carácter general en tanto delega en el Poder Ejecutivo facultad para establecer alícuotas para cualquier mercadería, siempre que no superen el 33%.

El último párrafo del artículo tiene igual carácter general al establecer el plazo de vigencia de la delegación de facultades.

A su vez, los párrafos intermedios contienen regulaciones específicas sobre las alícuotas para determinadas mercaderías. Ahora bien, en ellos, se advierte una diferencia ostensible entre algunos supuestos en los cuales el legislador “prohíbe” al Poder Ejecutivo establecer una alícuota superior a cierto porcentual (tiempo verbal presente), y otros supuestos en que establece que la alícuota “no podrá” superar cierto porcentual (tiempo verbal futuro).

Esta diferencia no ha de suponerse involuntaria por parte del legislador sino que responde a una clara intención de dar diverso tratamiento a cada supuesto, pues, como ha dicho la Corte: “...la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos: 306:721; 307:518; 319:2249; 326:704), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos (Fallos: 200:165; 304:1795; 315:1256; 326:2390; 331:2550).” (“Bernardes,





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 8771/2020/CA1

Jorge Alberto c/ ENA– Ministerio de Defensa s/ amparo por mora de la administración”, N° FCB 52020002/2012/CS1 – CA1, de fecha 20/03/20).

En efecto, en los casos en que el legislador “prohíbe”, ha elegido un verbo que denota una proscripción terminante de la conducta regulada. Además, lo conjuga en tiempo presente. Con lo cual, la prohibición es inmediata y el enunciado es directamente operativo a partir de la entrada en vigencia de la ley 27541.

Por el contrario, en los demás casos en que el legislador ha dispuesto que las alícuotas “no podrán” superar cierto límite –entre los que encuadra el *sub lite*, el verbo escogido no denota una imposición categórica sino que refiere al uso o no de las facultades delegadas a la Administración. Además, fue conjugado en tiempo futuro. Con lo cual, el enunciado no es de aplicación inmediata sino futura, es decir, es un enunciado programático.

c) Y aquí llegamos, al agravio final de la recurrente, que resalta el carácter pragmático de la norma en cuestión; carácter que se comparte, tal como se explicó.

Esta interpretación es armónica con el artículo 54 de la ley 27541 y explica por qué allí el legislador ratificó un decreto con vigencia hasta el 31/12/2020, y no resulta un hecho susceptible de ser soslayado el considerar que ese decreto 793/2018 que dispone una alícuota del 12% para los derechos de exportación fue objeto de una doble ratificación legislativa, primero por ley 27467, publicada en el B.O. el 4 de diciembre de 2018, y ahora por el art. 54 de la ley 27541, de lo que se sigue que la intención del legislador ha sido la de consagrar esa alícuota del 12%.

En efecto, la alícuota del 12% establecida en éste tendrá vigor hasta esa fecha y, a partir de entonces, cobrará operatividad el tope del 8% establecido en el artículo 52; ello, claro está, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 52 de la ley 27541 y la facultad que le otorga al Poder Ejecutivo Nacional dicha norma.

10) Que al análisis expuesto cabe agregar lo siguiente tocante a la alícuota que regirá desde el momento en que pierda vigencia el decreto 793/2018, esto es, desde el 31/12/2020.

Como ya se dijo, el primer párrafo establece un tope general del 33%; luego, los párrafos intermedios contienen prescripciones específicas; y, finalmente, el último párrafo establece un límite temporal con el mismo carácter general que el primer párrafo.

De ello se sigue que el último párrafo, al establecer el límite temporal en general para el ejercicio de las facultades delegadas hasta el 31/12/2021, alude a las que con igual carácter general delegó el primer párrafo.

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA



#34791407#266795511#20200915123918976

Ello importa que, una vez que fenezca la vigencia del decreto 793/2018 (31/12/2020) y hasta el término impuesto por el último párrafo del artículo 52 (31/12/2021), el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de las facultades que le acuerda el primer párrafo de establecer alícuotas a la exportación de mercaderías hasta el tope general del 33%.

Esta facultad comprende a aquellos productos respecto de los cuales el legislador dispuso que sus alícuotas “no podrán” superar determinados porcentuales y quedan excluidos únicamente aquellos respecto de los cuales se “prohíbe” sobrepasar cierto nivel. Ello así, atento a lo desarrollado en el considerando anterior y a la interpretación dada al último párrafo del art. 54 expuesta en este considerando.

En suma, desde el 1/01/2021 hasta el 31/12/2021, el Poder Ejecutivo podrá establecer alícuotas de hasta un tope de 33% para la mercadería que exporta la actora en virtud de lo normado en el primero y último párrafo del artículo 52. Si no hace uso de esa facultad, se vuelve operativa la alícuota del 8% que contiene el quinto párrafo de dicho artículo para productos mineros.

La hermenéutica expuesta, tal como ya hemos referido, da efecto y valor a cada precepto y a cada párrafo dentro de su correspondiente ámbito temporal y material, y de este modo armoniza los distintos preceptos y enunciados normativos en juego conforme la finalidad de cada uno y evitando que alguno quede vacío de contenido o destruido por una desmedida prevalencia conferida a otro.

11) Que, por último, se hará referencia a lo argüido por la actora al contestar la apelación según el cual respalda su pretensión lo afirmado por la DGA en el sentido de que el artículo 54, cuando comienza diciendo: “*Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior...*”, alude al artículo 52 y no al 53. Según la actora, esta aserción refuerza su pretensión debido a que, por esa razón, es evidente que la ratificación del decreto 793/2018 no puede suponer la inoperancia del tope del 8% en la alícuota para los productos mineros establecido en el art. 52.

Al respecto, he de resaltar primeramente la importancia que el Máximo Tribunal ha conferido a los debates parlamentarios, y especialmente al mensaje del miembro informante del proyecto, para interpretar la intención del legislador y el justo alcance que se debe darse a cada término utilizado en el texto legal.

En tal sentido, la Corte Suprema ha afirmado: “*Si bien es cierto que las palabras o conceptos expuestos en el seno del Congreso con motivo de la discusión de la ley son, en general, simples manifestaciones de opinión individual de las personas que las pronuncian, no puede decirse lo mismo de las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos, pues tales explicaciones o informes constituyen, según la*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

*doctrina y la jurisprudencia, una fuente propia de interpretación*” ( “Bernardes, Jorge...”, precedente citado).

Lo anterior viene a colación porque, en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados que precedió la sanción de la ley 27541, hubo discusiones y propuestas acerca de los artículos 52 a 54 y, luego de ellas, se decidió votarlos artículo por artículo y el miembro informante del proyecto, diputado por Neuquén Sr. Darío Martínez, los leyó uno por uno en la sesión del 19 de diciembre de 2019 y fueron sancionados con la redacción que ahora tienen.

En otras palabras, la Cámara de Diputados sancionó los artículos 52 a 54 en su redacción actual tras un debate y una lectura puntual de cada uno de ellos.

Por tal motivo, no puede suponerse descuido o error en los términos del artículo 54, máxime cuando, además, fue promulgado así por el Poder Ejecutivo quien, de haber advertido un error, podría haberlo observado a través del veto y no lo hizo.

Todo lo expuesto arroja que no puede acusarse descuido o inadvertencia del Congreso ni del Poder Ejecutivo, al darle al artículo 54 la redacción que tiene sino, por el contrario, ella fue objeto de una deliberada y consciente voluntad.

No es ocioso reiterar que: “...no puede entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador [quien podría haber establecido un determinado plazo para subsanar una situación como la acaecida en autos] y no lo hizo (Fallos: 328:456), toda vez que la inconsecuencia del legislador no se presume (Fallos: 319:2249)” (CSJN, Fallos 342:2100).

Asimismo, se ha dicho: “La primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquélla contempla” (CSJN, Fallos 330:4476).

En suma, por lo desarrollado, corresponde dar al artículo 54 de la ley 27541 en su primera parte la interpretación que surge naturalmente de sus términos, esto es, y valga la obviedad, que el artículo anterior a él es el art. 53 y no el 52, como pretendiere la actora.

**12)** Finalmente, se estima que no es óbice al temperamento adoptado el argumento esgrimido por la actora según el cual el artículo 52 debe prevalecer sobre el artículo 54 por ser aquél norma especial y éste norma general.

El argumento no es satisfactorio porque el decreto 793/2018 contempla la tributación de los productos mineros de manera especial. Más aún, contempla de modo precisamente individualizado el producto minero que exporta Minas Argentinas S.A., (v. Nomenclatura



Común del Mercosur obrante como Anexo I del decreto 1126/2017, al que remite el artículo 1 del decreto 793/2018).

De lo dicho se sigue que el artículo 54, al ratificar el decreto 793/2018, contempla de modo tan o más especial que el artículo 52 los productos mineros. De manera que no se puede argumentar que el primero es norma especial respecto del segundo, en lo que al producto minero exportado por la actora concierne.

En suma, por todo lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la apelación y rechazar el amparo.

**13)** Que deviene abstracto tratar el agravio del recurrente sobre la regulación de honorarios de los letrados de la contraria por altos. Ello así por cuanto, atento al resultado arribado, corresponde adecuarlos con arreglo a lo prescripto por el art. 279 del CPCCN - aplicable por la remisión efectuada por el art. 17 de la ley 16986.

Así, se fijan en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$63.840) para la Dra. María Paula Carena, como patrocinante de la actora, equivalentes a 20 UMA (cfr. art. 16 y 48 de la ley 27423); en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (\$25.536) para la Dra. María Fernanda Secco, como apoderada de la actora, equivalentes a 8 UMA (cfr. art. 20 de ley 27423); en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO (\$134.064) para los doctores Juan Carlos Benítez y José Sebastián Lloveras, en conjunto y en el doble carácter, equivalente a 42 UMA (cfr. art. 16, 20 y 48 de la ley 27423, y Ac. 2/20 de la CSJN).

En consecuencia, y siguiendo el precedente de esta Cámara “Quiroga”, (Nº FMZ 34405/2016/CA2, de fecha 27 de Febrero de 2020), y aun cuando se refiera a la ley 21839, allí se sostuvo que: *“El amparo es una acción declarativa de derecho que carece de contenido económico a los fines de la regulación de honorarios, por lo que corresponde se establezcan los mismos en forma discrecional, presentándose como únicos límites el mínimo legal impuesto por el artículo 36 de la Ley 21.839 y su modificatoria, la Ley 24.432, como así también las pautas de valoración del trabajo profesional contenidas en el art. 6 incisos b) a f)”*.

Anuda esta postura el texto del artículo 48 de la nueva ley de honorarios en cuanto distingue las acciones de amparo con monto de las sin monto.

Por ello, considero al presente como juicio sin monto, sin perjuicio de tener presente para la regulación arancelaria su trascendencia económica, su probable trascendencia para casos futuros, la novedad de la cuestión ventilada, la calidad y extensión de la labor





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B  
FMZ 8771/2020/CA1

desplegada, la responsabilidad profesional que está implicada y el resultado obtenido (cfr. art. 16, incisos b, c, d, e f y g, de la ley 27423).

Respecto de los honorarios de la presente instancia, corresponde regularlos en un 35% de lo fijado (art. 30 de la ley 27423).

**14)** Respecto de las costas de ambas instancias, atento a la complejidad del asunto, y el requerimiento de una interpretación judicial para dilucidar la cuestión, considero justo apartarme del principio objetivo de la derrota e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN, en función de la aplicación supletoria del art. 17 de la ley 16986).

De este modo, respondiendo a la única cuestión propuesta al inicio de este acuerdo, voto por la **NEGATIVA**. Así voto.

**Sobre la única cuestión propuesta, los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro, dijeron:** Que concuerdan con su distinguido colega de Sala preopinante, excepto en relación a las costas, que proponen imponerlas en ambas instancias, a la actora objetivamente perdidosa (art. 14 de la ley 16986).

En virtud de lo expuesto, por mayoría, **SE RESUELVE:** **1) HACER LUGAR** al recurso de apelación deducido por la demandada en fecha 2/07/20 y, en consecuencia, **REVOCAR** la sentencia de fecha 30/06/20. **2) NO HACER LUGAR** a la acción de amparo interpuesta por Minas Argentinas S.A. contra DIRECCION GENERAL DE ADUANAS - DIVISION SAN JUAN, por los fundamentos expuestos en esta resolución. **3) COSTAS** de ambas instancias a la actora objetivamente perdidosa (art. 14 de la ley 16986). **4) ADECUAR** los honorarios de primera instancia del siguiente modo: en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (\$63.840) para la Dra. María Paula Carena, como patrocinante de la actora, equivalentes a 20 UMA (cfr. art. 16 y 48 de la ley 27423); en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (\$25.536) para la Dra. María Fernanda Secco, como apoderada de la actora, equivalentes a 8 UMA (cfr. art. 20 de ley 27423); en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO (\$134.064) para los doctores Juan Carlos Benítez y José Sebastián Lloveras, en conjunto y en el doble carácter, equivalente a 42 UMA (cfr. art. 16, 20 y 48 de la ley 27423, y Ac. 2/20 de la CSJN). **5) REGULAR** los honorarios de esta instancia en un treinta y cinco por ciento de lo regulado en primera instancia para los letrados de ambas partes; esto es, la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$22.344)

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA



#34791407#266795511#20200915123918976

para la Dra. María Paula Carena, como patrocinante de la actora, equivalentes a 7 UMA; la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 (\$8.937,6) para la Dra. María Fernanda Secco, como apoderada de la actora, equivalentes a 2,8 UMA; en la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 40/100 (\$46.922,4) para los doctores Juan Carlos Benítez y José Sebastián Lloveras, en conjunto y en el doble carácter, equivalentes a 14,7 UMA (cfr. arts. 16, 20 y 30 de la ley 27423 y Acordada 2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 6º) El pago de los honorarios de ambas instancias será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago (cfr. art. 51 de ley 27423).

**Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.**

---

*Fecha de firma: 16/09/2020*

*Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: MARIA FERNANDA SEISDEDOS, SECRETARIA*



#34791407#266795511#20200915123918976